

La Mesa del gallego convoca un paro en la enseñanza contra el decreto Feijóo

A. M. / J. L. J.

SANTIAGO. La Mesa por la Normalización Lingüística de Galicia recrudeció su particular cruzada contra la oferta plurilingüe del Ejecutivo de Núñez Feijóo, y ayer anunció que el 21 de este mes no solamente habrá un paro general en todo el sistema educativo, sino una protesta en las calles de la capital gallega. La huelga en la enseñanza, convocada por la plataforma «Queremos Galego» antes incluso de la presentación oficial del borrador del decreto, irá acompañada, por tanto, de una manifestación que partirá de la alameda compostelana a las 11.30, y que culminará en el complejo administrativo de la Xunta, en San Caetano.

El portavoz de este movimiento reaccionario y de la Mesa, Carlos Callón, se encargó de que se publicitase toda la intención: 50.000 carteles, 75.000 folletos, así como asambleas y actos informativos con asociaciones de padres y madres de alumnos, equipos de normalización, y colectivos vinculados a la enseñanza. «Tanto para animar a todos a participar, como para analizar los contenidos del texto», avanzó Fran Rei, portavoz de «Queremos Galego».

«No somos extremistas»

Callón comenzó ya a emponzoñar, al mantener que el consejero de Educación, Jesús Vázquez Abad, le comentó hace un año que «esta norma saldría adelante se opine lo que se opine». Asimismo, mostró su discrepancia con que le acuñen el término extremista, «porque califican así a todo el que esté en contra de esta propuesta», y aventuró fracaso escolar, problemas de convivencia en los centros y conflictos en los claustros de profesores. El titular de la Xunta aclaró que «todo parece indicar que es una oposición al resultado electoral del pasado uno de marzo», dijo.

A través de un comunicado, la Mesa, afín al nacionalismo, incidió una vez más en que la propuesta «vulnera derechos básicos» reconocidos por la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Aseguró contar con informes jurídicos, que dicen que es «nula de pleno derecho».

El conflicto del agua entre Comunidades

Camps y Valcárcel no aceptarán la mínima modificación del Tajo-Segura

Los consejeros de Agua y Medio Ambiente de Murcia y Valencia exigen al presidente Zapatero que se pronuncie sobre la continuidad del trasvase

M. BUITRAGO

MURCIA. «Ni Barredas ni Cospedales. Quien tiene que resolver el problema es Rodríguez Zapatero», manifestó ayer el consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en su exigencia de que el jefe del Ejecutivo central se pronuncie sobre el futuro

del Trasvase Tajo-Segura. Acompañado por su homólogo de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, recalcó que los gobiernos de ambas regiones permanecerán inquebrantables para defender el trasvase y sus presidentes, Valcárcel y Camps, no admitirán «ni un hectómetro cúbico de re-

serva ni ninguna fecha de caducidad» en el Estatuto de Castilla-La Mancha.

Ambos consejeros enviaron ayer un aviso a la cúpula de su partido y a la secretaria general, María Dolores Cospedal, que tendrá que definirse en las próximas semanas sobre la oferta del PSOE de establecer una reserva para Castilla-La Mancha. Cerdá y Cotino se reafirmaron en que los parlamentarios populares votarán en el Congreso en contra de un texto que altere el Tajo-Segura. Subrayaron que estos diputados seguirán las indicaciones

que marquen los gobiernos regionales. Asimismo, anunciaron que en breve se reunirán los presidentes para dar un paso más en la estrategia de buscar una solución definitiva al déficit de la cuenca del Segura, que debe pasar por un tratamiento específico del agua en una próxima Conferencia de Presidentes que palíe el fracaso de los dos intentos anteriores.

Cerdá recordó que Castilla-La Mancha dispone por ley de toda el agua que necesite y pidió a Zapatero que restaure la autoridad del Estado en materia de agua.



Los consejeros de Agua y Medio Ambiente de Murcia y Comunidad Valenciana, Antonio Cerdá y Juan Cotino, ayer en Murcia

Denuncian el riesgo para la imagen de España y de la raza autóctona

Caballos españoles, a lomos de la polémica

POR D. P.

MADRID. El Cocibolca Jockey Club de Granada (Nicaragua) albergará desde el jueves la I Feria Centroamericana de Pura Raza Española. Es un evento oficial, internacional y sujeto al control del máximo organismo mundial, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancee), con sede en Sevilla y que, aunque autónoma, depende del Ministerio que dirige Elena Espinosa, con el que colabora. Es pues una organización avallada por el Gobierno y de la

que dependen el control de su árbol genealógico y el prestigio internacional de nuestro país en este ámbito, como así reconoce la propia Ancee.

Precisamente preocupados por la imagen de la Asociación y de nuestro país, varios miembros del consejo rector de Ancee han mostrado a ABC su inquietud por la designación de Alfonso del Castillo como juez único morfológico nombrado para el certamen nicaragüense. Según confirmaron desde la propia asociación pesa sobre él la apertura de un expediente informativo

por, entre otras cuestiones, acusar a un criador de la supuesta compra de un juez. Los denunciantes, que ya han presentado las pruebas pertinentes, solicitaron la suspensión cautelar de las funciones de Del Castillo hasta que el Comité Ejecutivo se pronuncie en su reunión del 22 de enero.

Al respecto, denuncian que el presidente de Ancee, Javier Conde, ha hecho oídos sordos a la solicitud de varios de sus consejeros de enviar a otro especialista a ese concurso. Del Castillo, además de juez, es formador de jueces y

está contratado por Ancee para velar por la integridad del sistema de concursos. Una cuestión determinante en un sector que supone un negocio que mueve más de 300 millones al año y que está liderado por los ganaderos españoles que exportan al extranjero ejemplares por valor de más de 40 millones.

Un ámbito en el que todo se basa en la integridad del sistema de evaluación que se aplique a los caballos en los más de 100 concursos que se celebran cada año y que culminan en la gran feria caballar de Sevilla, la Sicab, que reúne a más de 200.000 visitantes y en el que se produce casi el 50% de las transacciones del sector.